

Gabriel Flores

Unos presupuestos comunitarios para una Europa de ir tirando

nuevatribuna.es, 22 de febrero de 2020.

La cumbre extraordinaria del Consejo Europeo convocada para aprobar las líneas maestras de los presupuestos de la UE, el denominado Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, ha terminado en desacuerdo y bloqueo. Los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países miembros de la UE llegaron a Bruselas el jueves, 20 de febrero, y debatieron la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que reducía el límite del presupuesto al 1,074% de la Renta Nacional Bruta (RNB) del conjunto de los socios.

Constatadas las insalvables diferencias, que se pueden resumir en aumentar o reducir en unas centésimas ese porcentaje, se despidieron el viernes por la noche hasta mejor ocasión, a la espera de que maduren miedos y presiones.

Sin menospreciar el importante impacto que supone la reducción propuesta, respecto al anterior MFP 2014-2020 (en el que el límite al presupuesto se situó en el 1,16% de la RNB conjunta), no parece que el futuro de la UE o la búsqueda de soluciones a los graves problemas que afronta Europa dependan de una décima más o menos del presupuesto comunitario.

Quedan por delante meses de tiras y aflojas que enfrentarán a los socios “ricos” (contribuyentes netos), que pretenden un recorte mayor, con los “pobres” (receptores netos), que rechazan un recorte tan elevado

Si tal reducción se expresa en términos absolutos, el recorte máximo podría alcanzar los 90.000 millones de euros en los próximos 7 años. Y esa cifra empieza a tener peso e importancia, que se termina de entender cuando se constata que supondría una reducción del 14% en los fondos destinados a la Política Agrícola Común (PAC) y del 12% en los fondos de cohesión.

A nadie se le puede escapar la gran importancia de esa financiación europea para las personas vinculadas a las actividades del sector primario o a las regiones de menor renta que se beneficiaban de esos fondos, pero nada induce a pensar que los problemas o el futuro de la UE dependan de un debate en el que lo que está en juego es una cifra de entorno a los 13.000 millones de euros anuales a repartir desigualmente entre 27 socios, en función del peso de los sectores agrarios, actividades y productos subvencionables y de la renta por habitante de sus regiones más desfavorecidas.

Quedan por delante meses de tiras y aflojas que enfrentarán a los socios “ricos” (contribuyentes netos), que pretenden un recorte mayor, con los “pobres” (receptores netos), que rechazan un recorte tan elevado. La negociación producirá más desencuentros y ahondará la división entre los socios en momentos trascendentales que requerirían de más unidad y más capacidad negociadora de la UE. En los próximos meses, la atención y los esfuerzos comunitarios tendrán que concentrarse en la compleja negociación con el gobierno británico para definir las futuras relaciones mutuas, mientras de reojo observan su impacto sobre el curso ascendente de las derechas liberales y neosoberanistas o

antieuropeístas que pretenden vaciar de recursos y competencias a las instituciones comunitarias.

Mientras al otro lado del Atlántico han comenzado los preparativos de una larga campaña electoral en la que Trump podría buscar, en cualquier momento, un golpe de efecto contra los intereses europeos que le ayude a ganar de nuevo la presidencia estadounidense y refuerce su estrategia de crear un nuevo orden mundial sustentado en la razón de la fuerza, despojado de reglas multilaterales y con una presencia residual de órganos multilaterales de control, arbitraje o penalización. Sin olvidar qué intensidad alcanzará la desaceleración de la economía mundial en curso y los esfuerzos y recursos que Europa tendrá que dedicar a los nuevos objetivos y tareas que se plantea en torno a la transformación ecológica, la descarbonización de la economía, la revolución digital, la transición demográfica, la inmigración o la seguridad y defensa militar. ¿Cómo abarcar tantas tareas y de tanta envergadura con una UE desunida y unos presupuestos menguantes?

La Unión Europea sigue sin levantar el vuelo. Y el más reciente ejemplo de ese ir tirando carente de ambición es esta fallida cumbre extraordinaria sobre el presupuesto que financiará los proyectos y políticas comunes de la UE en el periodo 2021-2027.

Europa se aleja cada vez más de los objetivos y tareas que harían posible la construcción de una Europa capaz de proteger a su ciudadanía de las crisis financieras o comerciales por venir y de las tendencias autoritarias y tensiones militaristas existentes en el mundo. Los valores de solidaridad y cohesión económica, social y territorial han dejado de ser principios rectores efectivos de la convivencia, la acción política y la misión del proyecto de unidad europea. Y el compromiso con los Derechos Humanos ha sufrido un grave quebranto con el tratamiento dado a las personas migrantes que se tiran al mar o saltan vallas y concertinas en su desesperada huida de guerras y hambrunas o en su búsqueda, no menos desesperada, de refugio político y futuro. No se vislumbran, en tal situación, qué factores podrían contribuir al reforzamiento de una identidad europeísta abierta, acogedora, inclusiva, democrática y respetuosa con las diferencias nacionales o de otro tipo que conforman la Europa real.

Existe en Europa una mayoría social europeísta que se mantiene silenciosa porque no tiene ninguna razón u oportunidad de reivindicarse y manifestar su apoyo al rumbo que sigue la UE; una mayoría social progresista que poco a poco se deshilacha ante la presión de unos supuestos intereses nacionales a corto plazo y de una clase política sin perspectivas a largo plazo ni memoria de los orígenes y el desarrollo del proyecto de unidad europea. Paradójicamente, en los últimos años, sólo la mitad de la ciudadanía británica ha salido a la calle a defender su voluntad de seguir formando parte del proyecto de unidad europea, pero lo ha hecho cuando la división social, territorial y generacional de la sociedad británica en torno al Brexit se encontraba en el punto más álgido, la salida del RU era ya irreversible y la UE se mostraba incapaz de ofrecer un proyecto capaz de proteger y esperanzar a la mayoría de los Estados miembros y la ciudadanía europea. A la mayoría social que en Europa se declara europeísta le cuesta cada vez más reconocerse en esta UE que desde hace años carece de políticas europeístas creíbles e integradoras que protejan a su ciudadanía y atiendan las necesidades comunes y las específicas de cada socio.

Por lo visto en los últimos años, ni la UE ni la eurozona cuentan con instituciones capaces de afrontar los problemas que impiden que la UE y el euro funcionen bien. Buena parte de

los gobernantes de los países que han obtenido los mayores beneficios de la integración económica que suponen el mercado único y el euro ha olvidado que esa integración es una construcción histórica y, por tanto, precedera o reversible (como acaba de demostrar el Brexit) y que sus potenciales beneficios no pueden sostenerse sobre los daños económicos y sociales que se causan a las economías, los territorios o los sectores sociales más frágiles. La UE y el euro solo pueden desarrollarse si garantizan que los beneficios de la integración económica y los costes asociados a sus deficiencias institucionales se reparten de forma más equitativa o menos injusta entre los socios y entre los diferentes sectores sociales de cada Estado miembro. El proyecto de unidad europea podrá desarrollarse cuando demuestre su capacidad para identificar y corregir sus insuficiencias institucionales y democráticas y las políticas económicas que, por sus resultados, se muestren ineficaces y contraproducentes, como es el caso de las políticas de austeridad y devaluación salarial que se impusieron con especial saña a las economías con mayores desequilibrios macroeconómicos del sur de la eurozona.

Centrar en exclusiva el debate presupuestario, tal y como se viene haciendo desde hace casi dos décadas, en la reducción o el aumento en una décima del límite de gastos del MFP 2021-2027, solo se puede valorar como un error político de grueso calibre si la intención de los negociadores fuera la de reforzar la UE frente a los que les conviene una Europa debilitada, desunida y sin capacidad de negociación.

La mecánica de la negociación presupuestaria va a seguir incentivando, en los próximos meses, los comportamientos egoístas y oportunistas de todos los gobiernos comunitarios

Es un error táctico, porque se acepta un debate que tiene muy poco recorrido, ya que todo se resume en obtener un mínimo recorte o ampliación en el porcentaje que supone el presupuesto comunitario (constreñido, desde 1988, con ocasión de las primeras perspectivas financieras, el denominado “Paquete Delors I”, por el límite del 1,25% de la RNB, equivalente al 1,27% del PIB de la UE) y las habilidades negociadoras se centran en intentar que el previsible recorte afecte lo menos posible al país al que se representa y que su impacto se desvíe hacia otros socios. Finalmente, toda la negociación acabará reduciéndose a cómo ayudar a que salven la cara los gobiernos de los países receptores netos de fondos comunitarios más perjudicados, mientras los países que son contribuyentes netos justificarán sus mínimas concesiones con el argumento de que siguen manteniendo su objetivo de limitar el próximo MFP al 1% del PIB, un arbitrario límite cuantitativo que defienden desde 2004, y que lo seguirán utilizando como un señuelo y eficaz instrumento negociador que contrarresta las presiones de los socios que pretenden aumentarlo.

Y es, también, un error estratégico, porque absorbidos por una negociación en la que los jefes de Estado y de Gobierno se juegan mucho (en términos de prestigio, financiación y opinión pública), pierden de vista lo más importante: los beneficios que supone la mejora de la integración en un mercado único y, y sobre todo, el futuro del proyecto de unidad europea, que no depende de unos cuantos miles de millones de euros de más o de menos, sino de la capacidad para afrontar y superar los problemas económicos y las insuficiencias institucionales que llevan años fragmentando y debilitando la UE.

La mecánica de la negociación presupuestaria va a seguir incentivando, en los próximos meses, los comportamientos egoístas y oportunistas de todos los gobiernos comunitarios. La insuficiencia de verdaderos recursos propios comunitarios, el creciente peso relativo de las

contribuciones de los Estados miembros (en función del PIB y del IVA recaudado) y una grosera aproximación contable al cálculo de lo que cada socio aporta y recibe de las arcas comunitarias han consolidado la errónea apreciación de que las aportaciones nacionales son un desvío de fondos que debilita la capacidad presupuestaria de cada socio y deben ser compensadas mediante retornos de similar entidad.

Esa burda reconstrucción contable de lo que aporta y recibe cada socio impide la comprensión de los múltiples beneficios que se derivan de los procesos de integración económica, siempre que garanticen la existencia de una autoridad comunitaria legítima y democrática que vele para que esas potenciales ganancias alcancen a todos los socios de forma equitativa o, de no ser así, disponga de un presupuesto común de solidaridad, cohesión y reactivación económica que se pueda activar para compensar la desigual localización de tales beneficios o los choques externos asimétricos que afecten a una parte de los socios.

Europa no va hacia el desastre ni hacia un futuro luminoso. Simplemente, sigue deslizándose perezosamente hacia una lenta decadencia y una creciente inoperancia en la escena mundial. Y es en esos márgenes de previsible evolución en los que tendrán que actuar, pensar sus tareas y diseñar su acción política, sindical, social o cultural las fuerzas que quieran impulsar el cambio posible del proyecto de unidad europea y, por extensión, de un orden mundial globalizado. Huir de esa realidad e inventarse realidades paralelas, construcciones inviables o rupturas imposibles podrá contentar a doctrinarios e idealistas, pero no contribuirá en nada a cambiar los hechos, mejorar la vida, defender la democracia o derechos sociales y laborales de la mayoría social, que es de lo que se trata.